

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D.C, diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022).

Ref. No. 2021-00719.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver lo que en derecho corresponda frente al **recurso de reposición** formulado por la parte demandada, contra el auto de fecha 12 de noviembre de 2021 mediante el cual se libró mandamiento de pago.

II. ANTECEDENTES

1. La parte recurrente adujo que, el documento aportado como base de la ejecución no cumple con los requisitos de literalidad y autonomía, toda vez que, la persona natural que suscribió el título valor –Marisol Vallejo- en calidad de representante legal de VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S., no contaba con las facultades estatutarias otorgadas por el máximo órgano de dirección social para obtener préstamos a nombre de la sociedad, de ahí que, el título no le pueda ser oponible y deba revocarse el mandamiento de pago librado en su contra.

2. De conformidad con los artículos 110 y 319 del Código General del Proceso, se corrió traslado del recurso de reposición a la parte actora quien dentro del término legal se opuso a su prosperidad argumentando que de acuerdo con lo consignado en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad ejecutada si bien el representante legal tiene prohibido suscribir préstamos en donde se obtenga el aval de la sociedad para provecho propio, no desconoce sea la persona jurídica quien suscriba préstamos y figuren los representantes y/o administradores como avalistas tal y como ocurre en el caso particular.

III. CONSIDERACIONES

1. Ciertamente es que los medios de impugnación son instrumentos procesales puestos a disposición de las partes, orientados a corregir las posibles equivocaciones que el juez, en su labor de administrar justicia, defina en las decisiones que profiere. Uno de ellos es el recurso de reposición, cuya finalidad es conminar a la misma autoridad que profirió una decisión, para que la estudie

nuevamente y determine si hay lugar a revocarla, modificarla, aclararla o adicionarla, teniendo en cuenta si incurrió en una omisión o aplicó indebidamente la ley.

2. Ahora bien, para resolver el asunto puesto a consideración cumple precisar que tratándose de procesos ejecutivos, que son aquellos tendientes a la obtención del cumplimiento forzoso de una pretensión que se adeuda y que resulta de un título que tiene fuerza por sí mismo de plena prueba, exige que los acreedores para poder hacer efectivas las obligaciones sobre el patrimonio del deudor, deben aportar un instrumento que a su vez debe contar con determinadas calidades, pues debe ser contentivo de una obligación clara, expresa y exigible en contra del demandado y a favor del acreedor demandante, reuniendo los requisitos determinados en el Artículo 422 del Código General del Proceso.

De lo anterior se desprende que en el ordenamiento jurídico exige para el cobro coercitivo de una obligación como presupuesto básico la presencia de un título ejecutivo que debe acreditar sin lugar a dudas la existencia de una obligación a favor del acreedor y en contra del demandado en todo su contenido sin necesidad de acudir a una indagación preliminar, de modo que, se debe estar en posesión de un documento constituido previamente que de manera indiscutible acredite la prestación en todos sus aspectos, a tal punto que de ella emerja claramente de su simple lectura sin que sea menester acudir a interpretación alguna cualquiera de los elementos que la integran.

Al respecto, el tratadista Oscar Eduardo Henao Carrasquilla en comentarios al precitado artículo 422 del Código General del Proceso, precisó:

*“El título ejecutivo debe reunir los requisitos señalados en la ley. La inexistencia de esas condiciones legales hace del título un documento anómalo, incapaz de prestar merito ejecutivo. En otros términos, nadie niega la existencia del título, lo que se ataca es su idoneidad para la ejecución. En consecuencia, para que el título sea ejecutivo, para que pueda emplearse en un proceso de ejecución, debe contener los siguientes requisitos: a. Que conste en un documento; Que ese documento provenga del deudor o su causante; c. Que el documento sea autentico o cierto; d. Que la obligación contenida en el documento sea clara; e. Que la obligación sea expresa; f. Que la obligación sea exigible y, g. Que el título reúna ciertos requisitos de forma.”*¹

Cuando se trata de títulos valores la normatividad mercantil en su artículo 619 los define como documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, pudiendo destacarse de tal definición la concurrencia de unos presupuestos sustanciales consistentes en la literalidad, autonomía, legitimación e incorporación.

¹ Henao Carrasquilla Oscar Eduardo, C. G. P. artículo 422 (2021), pag 539, Leyer Editores.

Es decir, el derecho por el que se crea el título está plenamente representando en el instrumento sin que sea menester verificar las condiciones del negocio jurídico que le dio origen, siendo así, en lo que tiene que ver con la literalidad cabe aclarar que hace referencia al alcance del derecho como tal debiendo ceñirse tanto el acreedor como el deudor única y exclusivamente a lo allí consignado. Al respecto el tratadista Hildebrando Leal Pérez en comentarios al precitado canon señaló:

“La norma hace referencia al ejercicio del derecho literal, para dar a entender el derecho escrito, el contenido impreso en el título valor. La literalidad debe ser examinada desde dos puntos de vista: Activa y Pasiva. Conforme con la primera, el tenedor de un título valor no podrá invocar más derechos de los que aparecen en el documento, ni puede pretender exigir derechos distintos de los allí insertos. Por medio de la literalidad pasiva, se expresa que el obligado o interviniente en un título valor no podrá ser forzado a atender prestaciones distintas a las que reza el documento y cumplirá su obligación en la medida que pague la prestación que se describe en el mismo”²

De cara a los requisitos formales, se deben distinguir unos elementos esenciales generales, es decir, comunes a todos los títulos valores, consagrados en el artículo 621 del Código de Comercio, a saber: **i)** La mención del derecho que en el título se incorpora y, **ii)** la firma de quien lo crea; además de unas exigencias particulares, que para el caso del pagaré se encuentran dispuestas en el artículo 709 ibídem, como son: **i)** la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, **ii)** el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago, **iii)** la indicación de ser pagadero a la orden o al portador y **iv)** la forma de vencimiento.

En ese orden de ideas, se tiene que en el evento en que el extremo pasivo del litigio mediante recurso de reposición cuestiona el mandamiento de pago lo debe hacer con fundamento únicamente en causas de defectos formales o legales del título aportado como base de la acción pues de otro modo si se debiese acudir a otros medios probatorios, la impugnación de la ejecución sólo será posible a través de los medios exceptivos previstos en la ley y los cuales deben ser objeto de análisis y posterior pronunciamiento en la etapa procesal oportuna sin que sea ésta al desatar tal remedio en los términos del inciso segundo del artículo 430 del estatuto procesal.

3. Conforme a las anteriores precisiones descendiendo al caso objeto de estudio se advierte que la providencia objeto de censura se encuentra ajustada a los parámetros exigidos por la ley toda vez que los documentos que acompañaron a la demanda como báculo de la ejecución- Pagarés **No. 1730086598** y **1730086601**- reúnen los requisitos de forma necesarios para que pueda demandarse ejecutivamente y en consecuencia, ningún reparo cabe hacer sobre su condición de título ejecutivo, pues contienen la promesa incondicional de pagar una suma

² (2021) Código de Comercio, Hildebrando Leal Pérez, Comentarios al artículo 619, Editorial Leyer, pag 411.

determinada de dinero – \$ 59.948.267 y \$19.247.044 m./cte respectivamente, a favor de BANCOLOMBIA S.A cuyo vencimiento se pactó a una fecha cierta y determinada, 23 de marzo de 2021 y se indica de manera precisa los obligados cambiarios que no son otros que los aquí demandados de manera que se encuentran acreditados los requisitos de carácter general y especial consagrados en la normatividad mercantil.

3.1. Ahora bien, respecto del argumento central del presente recurso consistente en que el título valor base de la acción no le es oponible a la sociedad ejecutada, habida cuenta que la señora Marisol Vallejo Martínez, en su calidad de representante legal de VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S., no se encontraba facultada para adquirir créditos por cuenta y representación de la persona jurídica, se advierte que constituyen circunstancias fácticas que sin hesitación alguna deben ser alegadas a través de las excepciones de mérito que serán definidas y resueltas en la oportunidad procesal pertinente, esto es, la sentencia, toda vez que revisten asuntos de carácter sustancial y no se encuentran encaminados a enderezar el procedimiento o la estructura de la demanda.

Sobre el particular la Corte Constitucional en Sentencia T-283 de 2013 realiza una clara diferenciación frente a las condiciones sustanciales y las condiciones formales con las que debe contar el título ejecutivo, siendo éstas últimas las que la ley prevé se pueden estudiar mediante recurso de reposición formulado contra la orden de apremio así:

“...De estas normas se deriva que los títulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales.

Las condiciones formales consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación (i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme.

(...)

Las condiciones sustanciales exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es **clara** la obligación que no da lugar a equívocos, es decir, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Que sea **expresa** implica que de la

*redacción misma del documento aparece nítida y manifiesta la obligación. Que sea **exigible** significa que su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, es decir, que se trata de una obligación pura y simple y ya declarada.”*

4. En ese orden de ideas, comoquiera que los argumentos planteados en el recurso de reposición no versan sobre asuntos formales del título base de la ejecución ni del escrito de demanda, sino que buscan enervar en todo o en parte el mandamiento de pago librado en el presente asunto y atacan en estricto sentido las pretensiones del libelo introductor, constituyen aspectos de carácter sustancial que deben ser resueltos en un estadio procesal distinto, en consecuencia, no hay lugar a revocar la providencia censurada.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

V. RESUELVE

PRIMERO: MANTENER INCÓLUME el auto el auto de fecha 12 de noviembre de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGÚNDO: Por secretaría contrólese el término con que cuenta la pasiva para contestar la demanda y proponer excepciones.

Notifíquese,³

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
JUEZ**

³ Este proveído se notificó por estado No. 026 de 11 de marzo de 2022.

Firmado Por:

**Iris Mildred Gutierrez
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 019
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f4c9bedb282feab0886d678d9cde43ecc44230176a9bda02f22e05eaf7a39719**

Documento generado en 10/03/2022 10:54:43 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>